RESOLUCION NUMERO 02/2006

El Directorio Nacional del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), asistido de la Secretaria, Esther Wong, Gerente General de la Oficina Nacional reunido en el salón de conferencias de la Oficina Nacional donde celebra sus sesiones, hoy día veintidós (22) de febrero de 2006

CONSIDERANDO que el Directorio Nacional del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) es la autoridad máxima de decisión del mismo, de naturaleza intersectorial, plural, deliberativa, consultiva y supervisora, integrado por instituciones gubernamentales y no gubernamentales;

CONSIDERANDO que el Directorio Nacional tiene entre sus funciones aprobar las políticas, los planes y programas relacionados con niñez y adolescencia a ser diseñados y ejecutados por los órganos del Consejo;

CONSIDERANDO que es función de la Oficina Nacional diseñar, promover y ejecutar mecanismos de control, monitoreo y supervisión de los planes y programas relativos a la niñez y adolescencia que desarrollen entidades, tanto públicas como privadas;

CONSIDERANDO que es función de la Oficina Nacional elaborar las propuestas de reglamentación necesarias para el adecuado funcionamiento del Directorio Nacional, la Oficina Nacional, oficina regional, directorio municipal, oficina municipal, así como todas las demás propuestas de reglamentos de órganos adscritos al Consejo nacional para la Niñez y la Adolescencia

CONSIDERANDO que es función de la oficina nacional velar por el fiel cumplimiento de las normas y decisiones emanadas del Directorio del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI);

CONSIDERANDO que es función de la oficina nacional del Consejo nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) administrar el presupuesto y rendir cuentas sobre la administración y el uso de los recursos económicos, humanos y patrimoniales del Consejo nacional para la Niñez y la Adolescencia

CONSIDERANDO que es función del Directorio Nacional del CONANI garantizar el funcionamiento de mecanismos de protección para los niños, niñas y adolescentes amenazados o violentados en sus derechos en el ámbito administrativo y jurisdiccional

CONSIDERANDO que el artículo 67 de la Ley 136-03 establece que la autoridad parental es el conjunto de deberes y derechos que pertenecen, de modo igualitario, al padre y a la madre, en relación a los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoría de edad,

CONSIDERANDO que el artículo 70 de la Ley 136-03 establece que “los padres, representantes o responsables tienen la obligación de garantizar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno y efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

CONSIDERANDO que el artículo 74 de la Ley 136-03 establece que la autoridad del padre o de la madre puede ser objeto de suspensión... por:

- a) Falta, negligencia o incumplimiento injustificado de sus deberes, cuando tengan los medios para cumplirlos;
- b) Cuando el padre y/o la madre por acción u omisión, comprobadas por el juez competente, amenacen o vulneren los derechos del niño, niña y adolescente y pongan en riesgo su seguridad y bienestar integral aún como resultado de una medida disciplinaria

CONSIDERANDO que el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes tienen calidad para demandar la suspensión y la terminación de la autoridad parental, en virtud de lo que establece el artículo 77 de la Ley 136-03;

CONSIDERANDO que el artículo 171 de la Ley 136-03 establece que “el niño, niña o adolescente tienen derecho a recibir alimentos de parte de su padre o madre y persona responsable;

CONSIDERANDO que en virtud de lo que establece el artículo 170 de la Ley 136-03 las obligaciones son de orden público, definiendo alimentos como “los cuidados, servicios y productos encaminados a la satisfacción de las necesidades básicas de niño, niña o adolescente, indispensables para su sustento y desarrollo: alimentación, habitación, vestido, asistencia, atención médica, medicina, recreación, formación integral, educación académica...”

CONSIDERANDO que el principio VII de la Ley 136-03 establece que “El Estado, como representante de toda la sociedad, tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos, y no podrá alegar limitaciones presupuestarias para incumplir las obligaciones establecidas;

CONSIDERANDO que el principio VIII de la Ley 136-03 establece que “La familia es responsable, en primer término, de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo, educación y protección integral de sus hijos e hijas.

CONSIDERANDO que el Principio IX de la Ley 136-03 establece que “La sociedad y sus organizaciones deben y tienen derecho a participar activamente en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en la definición, ejecución y control de las políticas públicas de protección dirigidas a los niños, niñas y adolescentes”

CONSIDERANDO que el Artículo 18 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que “ Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y

el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño”.

CONSIDERANDO que el Artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que “ Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

CONSIDERANDO que el Artículo 27 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que “ A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño”.

CONSIDERANDO que el Artículo 32 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que “ Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.

CONSIDERANDO que el Artículo 36 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que “Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar”.

CONSIDERANDO que el Artículo 39 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; ... Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”;

CONSIDERANDO que el artículo 40 de la Ley 136-03 establece que “Se prohíbe el trabajo de las personas menores de catorce años. La persona que por cualquier medio compruebe la violación a esta prohibición pondrá el hecho en conocimiento de la Secretaría de Estado de Trabajo y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), a fin de que se adopten las medidas adecuadas para que dicho menor cese sus actividades laborales y se reincorpore al sistema educativo, en caso de que esté fuera del sistema”

CONSIDERANDO que las Juntas Locales de Protección y restitución de Derechos forman parte del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes;

CONSIDERANDO que el artículo 51 de la Ley 136-03 establece que “El Sistema nacional de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes tiene por finalidad garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia y la promoción de su desarrollo integral mediante la coordinación de políticas y acciones intersectoriales e interinstitucionales;

CONSIDERANDO que con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en condiciones de amenaza, vulneración y/o violación flagrante de los mismos el artículo 461 establece las medidas de protección y restitución de derechos

CONSIDERANDO que las medidas de protección y restitución de derechos pueden imponerse por los siguientes motivos:

- a) Por acción u omisión de las instituciones públicas y privadas;
- b) Por falta, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o responsables;
- c) Por acciones u omisiones contra sí mismo;
- d) Por acciones u omisiones o abuso de particulares.

CONSIDERANDO que “la infancia no puede esperar a que se elimine la pobreza extrema...; que “no es posible recuperar la infancia cuando ya se ha perdido...” que “para miles de niños y niñas, su infancia y su futuro dependen de que se tomen medidas rápidas y decisivas ahora mismo para abordar estas amenazas.”

CONSIDERANDO que para la prevención y atención de este fenómeno es necesario tomar en cuenta las condiciones estructurales que determinan que niñas, niños y jóvenes vivan y trabajen en la calle, a través de medidas que fortalezcan el empleo bien remunerado, la infraestructura familiar y comunitaria, así como la capacidad de crianza y educación de hijos e hijas.

CONSIDERANDO que dada la complejidad del fenómeno de la infancia y la adolescencia en situación de calle es necesario desarrollar un programa de articulación nacional, regional y municipal para su prevención y atención;

CONSIDERANDO que el Art. 6. del Estatuto del Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia, garante del estado de derecho, funcionalmente independiente en sus actuaciones. Es el encargado de dirigir la investigación de los hechos de carácter penal en representación de la sociedad; de la puesta en movimiento y del ejercicio de la acción pública; proteger a las víctimas y testigos en el ámbito de las actuaciones que realice y ejercer y cumplir todas las demás atribuciones que le confieren las leyes.

CONSIDERANDO que es función del Ministerio Público velar por la observación de la Constitución, las leyes y las libertades públicas fundamentales en todo el territorio nacional, procurando su respeto y proveyendo la celeridad y la buena marcha de la administración de justicia en los procesos en que estén comprometidos o afectados el orden público y las buenas costumbres

CONSIDERANDO que el artículo 16 del Estatuto del Ministerio Público establece que corresponde al Ministerio Público el ejercicio exclusivo de la acción penal pública, sin perjuicio de la participación de la víctima o de los ciudadanos en el proceso conforme a lo que establece la ley, teniendo como atribuciones: investigar los hechos punibles de la acción pública; poner en

movimiento y ejercer la acción pública en los casos que corresponda; adoptar las medidas para proteger las víctimas, adoptar medidas para proteger los intereses de los menores, los incapaces y los indigentes; ejercer, a través de los representantes del Ministerio Público especializado, las atribuciones señaladas en las leyes de su creación;

CONSIDERANDO que el abandono infantil consiste en todo comportamiento que provoca descuido y desatención de las necesidades básicas, así como la ausencia de los derechos humanos de los niños y las niñas.

CONSIDERANDO que el abandono infantil es una actitud de negligencia y descuido de los adultos a los pequeños y se observa en la falta de alimentación, vestido, higiene personal, atención médica y vivienda; desinterés en todo lo referente a su educación;

CONSIDERANDO que el artículo 449 de la Ley 136-03 establece que "Todos los ayuntamientos, a nivel nacional, dispondrán de una asignación presupuestaria mínima del 5% del total de los recursos ordinarios anuales que perciban, destinadas a la ejecución de programas y acciones específicas para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia de su municipio";

RECONOCIENDO que por no existir las juntas locales de protección y restitución de derechos, es el Ministerio Público la instancia por ante la cual se presentan de manera cotidiana las denuncias sobre amenazas, vulneración o violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes;

RECONOCIENDO que ha correspondido al Ministerio Público actuar de oficio o por instancia de parte o ante la sospecha de amenaza, vulneración o violación flagrante de los derechos de niños, niñas y adolescentes, actuación supletoria como integrante del Sistema Nacional de Protección, por la inexistencia de las juntas locales de protección y restitución de derechos;

POR TANTO: Con fundamento en la Constitución de la República Dominicana, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley 136-03 y el Estatuto del Ministerio Público

VISTOS los tipos de medidas contempladas en el artículo 463 de la Ley 136-03

VISTA la moción presentada por el representante de la Coalición de ONGS por la Infancia

RESUELVE

PRIMERO.- Toda medida de rescate de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo serán realizadas en coordinación y bajo la supervisión del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, en virtud de lo que establece la Ley 136-03.

SEGUNDO: El Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes (o quien haga sus funciones) y las Unidades Multidisciplinarias de Atención Integral, bajo el control, monitoreo y supervisión de la Oficina Nacional del CONANI, asumirán las funciones de las Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos, hasta que estas sean establecidas por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, por lo que podrán:

- a) Recibir las denuncias sobre amenaza, vulneración o violación flagrante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en su localidad;
- b) Actuar de oficio ante la sospecha de amenaza, vulneración o violación flagrante de los derechos de niños, niñas y adolescentes;
- c) Poner en práctica el proceso de protección y restitución de derechos, establecido en el capítulo III, del título II del Libro Cuarto de la Ley 136-03;
- d) Ordenar las medidas de protección y restitución de derechos en el ámbito administrativo, conforme a lo establecido en la Ley 136-03;
- e) Apoderar al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de los casos de incumplimiento de las medidas de protección y restitución de derechos para su conocimiento.

TERCERO.- La Oficina Nacional deberá en un plazo no mayor de seis meses presentar al Directorio Nacional una propuesta de Plan Nacional de Prevención y Atención a la infancia y adolescencia en riesgos asociados a la calle, basado en una política articulada, integradora y sustentable a favor de esta población que contemple el establecimiento de mecanismos permanentes de coordinación entre las instancias públicas y privadas vinculadas al tema, sobre la base de los criterios de calidad, pertinencia, relevancia, presupuesto, marco jurídico, transparencia y visión a futuro.

CUARTO.- La Oficina Nacional deberá en un plazo no mayor de seis meses presentar al Directorio Nacional una propuesta de Norma Técnica de Atención a los Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle

QUINTO.- La Oficina Nacional en un plazo no mayor de dos (2) meses presentará al Directorio Nacional los planes específicos para la conformación y apoyo al funcionamiento de las juntas locales de protección y restitución de derechos, incluyendo en éstos la definición del perfil y criterios de selección de los miembros de las juntas locales de protección.

SEXTO.- La Oficina Nacional habilitará en un plazo no mayor de doce meses las Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos necesarias y de acuerdo con las posibilidades presupuestarias, en los municipios de más alto riesgo para los niños, niñas y adolescentes.

SEPTIMO.- La Oficina Nacional y las Oficinas regionales como instancias de desconcentración habilitarán las Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos en los municipios cuyos

ayuntamientos de común acuerdo con el Consejo Nacional determinen destinar los recursos ordinarios necesarios para estos fines

OCTAVO.-Comunicar la presente Resolución a las entidades públicas y privadas del Sistema nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

NOVENO.-La presente Resolución es de ejecución inmediata y entrará en vigencia al momento de su publicación en la página web del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia www.conani.gov.do.

Lic. Kirsys Fernández

Presidente

Lic. Carmen Salce

Representante de la Lic. Elena Viyella
Vicepresidente del Directorio y
Presidenta del Consejo Nacional
de la Empresa Privada
CONEP

Rvdo. Padre Juan Linares

Representante de la Coalición de ONG
Coalición de ONG Por la Infancia

Sr. Sergio Abreu

Representante de las
Organizaciones no
Gubernamentales (ONG)

Lic. Librada Vidal

Representante
Secretaría de Estado de Educación

Lic. Daniel Rondòn
Representante
Secretaría de Estado de Trabajo

Sr. José De Los Santos
Representante del Sector Sindical

Sr. Rafael Rondòn
Representante
De la Iglesia Católica

Srta. Alexandra De León
Representante
Secretaría de Salud Pública

Lic. Cristina Perez de Amorós
Representante
Secretaria de la Mujer

Dra. Marisol Tobal
Representante
Procuraduría Gral de la República